

LUIS ALBERTO ROMERO
BREVE HISTORIA DE LA
ARGENTINA CONTEMPORÁNEA.

Cap. VII

VII. EL PROCESO, 1976-1983

El genocidio

El 24 de marzo de 1976 la Junta de Comandantes en Jefe, integrada por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti, se hizo cargo del poder, dictó los instrumentos legales del llamado Proceso de Reorganización Nacional y designó presidente de la Nación al general Videla, quien además continuó al frente del Ejército hasta 1978.

El caos económico de 1975, la crisis de autoridad, las luchas facciosas y la muerte presente cotidianamente, la acción espectacular de las organizaciones guerrilleras —que habían fracasado en dos grandes operativos contra unidades militares en el Gran Buenos Aires y Formosa—, el terror sembrado por la Triple A, todo ello creó las condiciones para la aceptación de un golpe de Estado que prometía restablecer el orden y asegurar el monopolio estatal de la fuerza. La propuesta de los militares —quienes poco habían hecho para impedir que el caos llegara a ese extremo— iba más allá: consistía en eliminar de raíz el problema, que en su diagnóstico se encontraba en la sociedad misma y en la naturaleza irresoluta de sus conflictos. El carácter de la solución proyectada podía adivinarse en las metáforas empleadas —enfermedad, tumor, extirpación, cirugía mayor—, resumidas en una más clara y contundente: cortar con la espada el nudo gordiano.

El tajo fue en realidad una operación integral de represión, cuidadosamente planeada por la conducción de las tres armas, ensayada primero en Tucumán —donde el Ejército intervino oficialmente desde 1975— y luego ejecutada de modo sistemático en todo el país. Así lo estableció la investigación realizada en 1984 por la Comisión

10

11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, que creó el presidente Raúl Alfonsín, y luego la Justicia, que juzgó a los militares implicados y condenó a muchos de ellos. Los mandos militares concentraron en sus manos toda la acción y los grupos parapoliciales de distinto tipo que habían operado en los años anteriores se disolvieron o se subordinaron a ellos. Las tres armas se asignaron diferentes zonas de responsabilidad y hasta mantuvieron una cierta competencia para demostrar mayor eficacia, lo que dio a la operación una fisonomía anárquica y faccional que, sin embargo, no implicó acciones casuales, descontroladas o irresponsables, y lo que pudo haber de ello formó parte de la concepción general de la horrenda operación.

La planificación general y la supervisión táctica estuvo en manos de los más altos niveles de conducción castrense, y los oficiales superiores no desdeñaron participar personalmente en tareas de ejecución, poniendo de relieve el carácter institucional de la acción y el compromiso colectivo. Las órdenes bajaban, por la cadena de mandos, hasta los encargados de la ejecución, los Grupos de Tareas —integrados principalmente por oficiales jóvenes, con algunos suboficiales, policías y civiles—, que también tenían una organización específica. La ejecución requirió también un complejo aparato administrativo, pues debía darse cuenta del movimiento —entradas, traslados y salidas— de un conjunto muy numeroso de personas. Cada detenido, desde el momento en que era considerado sospechoso, era consignado en una ficha y un expediente, se hacía un seguimiento, una evaluación de su situación y se tomaba una decisión final que correspondía siempre al más alto nivel militar. La represión fue, en suma, una acción sistemática realizada desde el Estado.

Se trató de una acción terrorista, dividida en cuatro momentos principales: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. Para los secuestros, cada grupo de operaciones —conocido como “la patota”— operaba

preferentemente de noche, en los domicilios de las víctimas, a la vista de su familia, que en muchos casos era incluida en la operación. Pero también muchas detenciones fueron realizadas en fábricas o lugares de trabajo, en la calle, y algunas en países vecinos, con la colaboración de las autoridades locales. La operación se realizaba con autos sin patente pero bien conocidos —los fatídicos “Falcon verdes”—, mucho despliegue de hombres y armamento pesado, combinando el anonimato con la ostentación, todo lo cual aumentaba el buscado efecto aterrador. Al secuestro seguía el saqueo de la vivienda, perfeccionado posteriormente cuando se obligó a las víctimas a ceder la propiedad de sus inmuebles, con todo lo cual se conformó el botín de la horrenda operación.

El destino primero del secuestrado era la tortura, sistemática y prolongada. La “picana”, el “submarino” —mantener sumergida la cabeza en un recipiente con agua— y las violaciones sexuales eran las formas más comunes; se sumaban otras que combinaban la tecnología con el refinado sadismo del personal especializado, puesto al servicio de una operación institucional de la que no era raro que participaran jefes de alta responsabilidad. La tortura física, de duración indefinida, se prolongaba en la psicológica: sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de amigos, hijos o esposos, comprobar que todos los vínculos con el exterior estaban cortados, que no había nadie que se interpusiera entre la víctima y el victimario. En principio la tortura servía para arrancar información y lograr la denuncia de compañeros, lugares, operaciones, pero más en general tenía el propósito de quebrar la resistencia del detenido, anular sus defensas, destruir su dignidad y su personalidad. Muchos morían en la tortura, se “quedaban”; los sobrevivientes iniciaban una detención más o menos prolongada en alguno de los trescientos cuarenta centros clandestinos de detención —los “chupaderos”— que funcionaron en esos años y cuya existencia fue reiteradamente negada por las autorida-

des. Se encontraban en unidades militares —la Escuela de Mecánica de la Armada, Campo de Mayo, los Comandos de Cuerpo— pero generalmente en dependencias policiales, y eran conocidos con nombres de macabra fantasía: el Olimpo, el Vesubio, la Cacha, la Perla, la Escuelita, el Reformatorio, Puesto Vasco, Pozo de Bánfield... La administración y control del movimiento de este enorme número de centros da idea de la complejidad de la operación y de la cantidad de personas involucradas, así como de la determinación requerida para mantener su clandestinidad. En esta etapa final de su calvario, de duración imprecisa, se completaba la degradación de las víctimas, a menudo mal heridas y sin atención médica, permanentemente encapuchadas o "tabicadas", mal alimentadas, sin servicios sanitarios. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones, para ser luego despojadas de sus hijos, de los cuales en muchos casos se apropiaban sus secuestradores. No es extraño que, en esa situación verdaderamente límite, algunos secuestrados hayan aceptado colaborar con sus victimarios, realizando tareas de servicio o acompañándolos para individualizar en la calle a antiguos compañeros, todavía libres. Pero para la mayoría el destino final era el "traslado", es decir su ejecución.

Ésta era la decisión más importante y se tomaba en el más alto nivel operacional, como la jefatura de cada uno de los cuerpos de Ejército, después de un análisis cuidadoso de los antecedentes, potencial utilidad o "recuperabilidad" de los detenidos. Pese a que la Junta Militar estableció la pena de muerte, nunca la aplicó, y todas las ejecuciones fueron clandestinas. A veces los cadáveres aparecían en la calle, como muertos en enfrentamientos o intentos de fuga. En algunas ocasiones se dinamitaron pilas enteras de cuerpos, como espectacular represalia a alguna acción guerrillera. Pero en la mayoría de los casos los cadáveres se ocultaban, enterrados en cementerios como personas desconocidas, quemados en fosas colectivas

que eran cavadas por las propias víctimas antes de ser fusiladas, o arrojados al mar con bloques de cemento, luego de ser adormecidos con una inyección. De ese modo, no hubo muertos sino "desaparecidos".

Las desapariciones se produjeron masivamente entre 1976 y 1978, el trienio sombrío, y luego se redujeron a una expresión mínima. Fue un verdadero genocidio. La Comisión que las investigó documentó nueve mil casos, pero indicó que podía haber muchos otros no denunciados, mientras que las organizaciones defensoras de los derechos humanos reclamaron por treinta mil desaparecidos. Se trató en su mayoría de jóvenes, entre quince y treinta y cinco años. Algunos pertenecían a las organizaciones armadas: el ERP fue diezmado entre 1975 y 1976, y a la muerte de Roberto Santucho, en julio de ese año, poco quedó de la organización. La organización Montoneros, que también experimentó fuertes bajas en sus cuadros, siguió operando, aunque tuvo que limitarse a acciones terroristas —hubo algunos asesinatos de gran resonancia, como el del jefe de la Policía Federal— desvinculadas de la práctica política, mientras su conducción y cuadros principales emigraron a México. Lo cierto es que cuando la amenaza real de las organizaciones cesó, la represión continuó su marcha. Cayeron militantes de organizaciones políticas y sociales, dirigentes gremiales de base, con actuación en las comisiones internas de fábricas —algunos empresarios solían requerir al efecto la colaboración de los responsables militares—, y junto con ellos militantes políticos varios, sacerdotes, intelectuales, abogados relacionados con la defensa de presos políticos, activistas de organizaciones de derechos humanos, y muchos otros, por la sola razón de ser pacientes de alguien, figurar en una agenda o haber sido mencionados en una sesión de tortura. Pero más allá de los accidentes y errores, las víctimas fueron las queridas: con el argumento de enfrentar y destruir en su propio terreno a las organizaciones armadas, la operación procu-

raba eliminar todo activismo, toda protesta social —hasta un modesto reclamo por el boleto escolar—, toda expresión de pensamiento crítico, toda posible dirección política del movimiento popular que se había desarrollado desde mediados de la década anterior y que entonces era aniquilado. En ese sentido los resultados fueron exactamente los buscados.

Las víctimas fueron muchas, pero el verdadero objetivo eran los vivos, el conjunto de la sociedad que, antes de emprender su transformación profunda, debía ser controlada y dominada por el terror y la palabra. El Estado se desdobló: una parte, clandestina y terrorista, practicó una represión sin responsables, eximida de responder a los reclamos. La otra, pública, apoyada en un orden jurídico que ella misma estableció, silenciaba cualquier otra voz. No sólo desaparecieron las instituciones de la República, sino que fueron clausuradas autoritariamente la confrontación pública de opiniones y su misma expresión. Los partidos y la actividad política toda quedaron prohibidos, así como los sindicatos y la acción gremial; se sometió a los medios de prensa a una explícita censura, que impedía cualquier mención al terrorismo estatal y sus víctimas, y artistas e intelectuales fueron vigilados. Solo quedó la voz del Estado, dirigiéndose a un conjunto atomizado de habitantes.

Su discurso, masivo y abrumador, retomó dos motivos tradicionales de la cultura política argentina y los desarrolló hasta sus últimas y horrorosas consecuencias. El adversario —de límites borrosos, que podía incluir a cualquier posible disidente— era el no ser, la "subversión apátrida" sin derecho a voz o a existencia, que podía y merecía ser exterminada. Contra la violencia no se argumentó en favor de una alternativa jurídica y consensual, propia de un Estado republicano y de una sociedad democrática, sino de un orden que era, en realidad, otra versión de la misma ecuación violenta y autoritaria.

El terror cubrió la sociedad toda. Clausurados los espacios donde los individuos podían identificarse en colectivos más amplios, cada uno quedó solo e indefenso ante el Estado aterrorizador, y en una sociedad inmovilizada y sin reacción se impuso —como ha señalado Juan Corradi— la cultura del miedo. Algunos no aceptaron esto y emigraron al exterior —por una combinación variable de razones políticas y profesionales— o se refugiaron en un exilio interior, en ámbitos recoletos, casi domésticos, practicando el mimetismo a la espera de la brecha que permitiera volver a emerger. La mayoría aceptó el discurso estatal, justificó lo poco que no podía ignorar de la represión con el argumento del "por algo será", o se refugió en la deliberada ignorancia de lo que sucedía a la vista de todos. Lo más notable, sin embargo, fue una suerte de asunción e internalización de la acción estatal, traducida en el propio control, en la autocensura, en la vigilancia del vecino. La sociedad se patrulló a sí misma, se llenó de *kapos*, ha escrito Guillermo O'Donnell, asombrado por un conjunto de prácticas que —desde la familia a la vestimenta o las creencias—, revelaban lo profundamente arraigado que en ella estaba el autoritarismo que el discurso estatal potenciaba.

El gobierno militar nunca logró despertar entusiasmo ni adhesión explícita en el conjunto de la sociedad, pese a que lo intentó, a mediados de 1978, cuando se celebró el Campeonato Mundial de Fútbol y las máximas jerarquías asistieron a los estadios donde la Argentina obtuvo el título, y a fines de ese año cuando, agitando el más turbio sentimiento chauvinista, poco faltó para iniciar una guerra con Chile. Sólo obtuvo pasividad, pero le alcanzó para encarar las transformaciones profundas que —en su prospecto— habrían de eliminar definitivamente los conflictos de la sociedad, y cuyas primeras consecuencias —la fiebre especulativa— contribuyeron por otra vía a la atomización de la sociedad y a la eliminación de cualquier posible respuesta.

La economía imaginaria: la gran transformación

Esa transformación fue conducida por José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía durante los cinco años de la presidencia de Videla. Cuando asumió, debía enfrentar una crisis cíclica aguda —inflación desatada, recesión, problemas en la balanza de pagos—, complicada por la crisis política y social y el fuerte desafío de las organizaciones armadas al poder del Estado. La represión inicial, que descabezó la movilización popular, sumada a una política anticrisis clásica —más o menos similar a todas las ejecutadas desde 1952— permitió superar la coyuntura. Pero esta vez las Fuerzas Armadas y los sectores del *establishment* que las acompañaban habían decidido ir más lejos. En su diagnóstico, la inestabilidad política y social crónica nacía de la impotencia del poder político ante los grandes grupos corporativos —los trabajadores organizados pero también los empresarios— que alternativamente se enfrentaban, generando desorden y caos, o se combinaban, unidos por una lógica peculiar, para utilizar en beneficio mutuo las herramientas poderosas del Estado intervencionista y benefactor. Una solución de largo plazo debía cambiar los datos básicos de la economía y así modificar esa configuración social y política crónicamente inestable. No se trataba de encontrar la fórmula del crecimiento —pues se juzgaba que a menudo allí anidaba el desorden— sino la del orden y de la seguridad. Invirtiendo lo que hasta entonces —de Perón a Perón— habían sido los objetivos de las distintas fórmulas políticas, se buscó solucionar los problemas que la economía ponía a la estabilidad política, si era necesario a costa del propio crecimiento económico.

Según un balance que progresivamente se imponía, cuyas implicaciones ha puesto en evidencia Adolfo Canitrot, el Estado intervencionista y benefactor, tal como se

había constituido desde 1930, era el gran responsable del desorden social; en cambio, el mercado parecía el instrumento capaz de disciplinar por igual a todos los actores, premiando la eficiencia e impidiendo los malsanos comportamientos corporativos. Este argumento, que como se verá llegó a dominar en los discursos y en el imaginario, oscureció lo que fue, en definitiva, la solución de fondo: al final de la transformación que condujo Martínez de Hoz, el poder económico se concentró de tal modo en un conjunto de grupos empresarios, transnacionales y nacionales, que la puja corporativa y la negociación ya no fueron siquiera posibles. Esta transformación no fue el producto de fuerzas impersonales y automáticas: requirió de una fuerte intervención del Estado, para reprimir y desarmar a los actores del juego corporativo, para imponer las reglas que facilitarían el crecimiento de los vencedores y aun para trasladar hacia ellos, por la clásica vía del Estado, recursos del conjunto de la sociedad que posibilitaron su consolidación.

La ejecución de esa transformación planteaba un problema político, que ha expuesto Jorge Schvarzer: la conducción económica debía en primer lugar durar en el poder un tiempo suficientemente prolongado, y luego crear una situación que, más allá de su permanencia, fuera irreversible. El ministro de Economía y su grupo permanecieron durante cinco años: la irreversibilidad de la situación que crearon se manifestó inmediatamente después de su salida, cuando sus sucesores intentaron cambiar algo el rumbo y fracasaron rotundamente.

Martínez de Hoz contó inicialmente con un fuerte apoyo, casi personal, de los organismos internacionales y los bancos extranjeros —que le permitió sortear varias situaciones difíciles— y del sector más concentrado del *establishment* económico local. La relación con los militares fue más compleja, en parte por sus profundas divisiones —entre las armas y aun entre facciones— que se expresaban en apoyos, críticas o bloqueos a su gestión, y

en parte por el peso que entre ellos tenían muchas ideas y concepciones que en el plan del ministro debían ser cambiadas, y con las que tuvo que encontrar algún punto de acuerdo. Fue una relación conflictiva, de potencia a potencia. Los militares juzgaban que el descabezamiento del movimiento popular, la eliminación de sus grandes instrumentos corporativos y la fuerte reducción de los ingresos de los sectores trabajadores debía equilibrarse, por razones de seguridad, con el mantenimiento del pleno empleo, de modo que la receta recesiva más clásica estaba descartada. También tenían los militares una visión más tradicional de la cuestión del Estado, o al menos de la parte de él que aspiraban a manejar en beneficio personal o corporativo. Pero muchos de los que aceptaron la propuesta básica de eliminar la participación del Estado en la transferencia de ingresos exigieron en cambio la supervivencia de las empresas estatales —generalmente conducidas por oficiales superiores— y la expansión del gasto público, lo que también bloqueó la clásica receta recesiva y supuso a la larga un fracaso en el plan del ministro. Las relaciones con los empresarios tampoco fueron fáciles, debido a la cantidad de intereses sectoriales que debían ser afectados; para imponerse, fue decisiva la inflexibilidad del ministro, unida a su capacidad de predicador, mostrando la tierra prometida al final de la travesía del desierto, con una seguridad mayor cuanto más la realidad parecía desmentir sus pronósticos. Pero su arma de triunfo principal fue haber colocado durante varios años a la economía en una situación de inestabilidad tal que sólo era posible seguir avanzando, guiados por el mismo piloto, so riesgo de una catástrofe; cuando esto dejó de funcionar, la concentración y el endeudamiento ya habían creado los mecanismos definitivos de disciplinamiento y control.

Las primeras medidas del equipo ministerial, que cubrieron largamente el primer año, no dieron idea del rumbo futuro. Luego de intervenir la CGT y los principa-

les sindicatos, reprimir a los militantes, intervenir militarmente muchas fábricas, suprimir las negociaciones colectivas y prohibir las huelgas, se congelaron los salarios por tres meses con lo que —dada la fortísima inflación— cayeron en términos reales alrededor de un 40%. El Estado pudo superar su déficit y las empresas acumular, lo que sumado a los créditos externos rápidamente otorgados permitió superar la crisis cíclica sin desocupación.

Desde mediados de 1977 —y a medida que la conducción se afirmaba— comenzaron a plantearse las grandes reformas, que supusieron trastornar las normas básicas con que había funcionado la Argentina desde 1930. La reforma financiera acabó con una de las herramientas del Estado para la transferencia de ingresos entre sectores: la regulación de la tasa de interés, la existencia de crédito a tasas negativas y la distribución de este subsidio según normas y prioridades fijadas por las autoridades. Profundizando un mecanismo que ya operaba desde 1975, se liberó la tasa de interés, se autorizó la proliferación de bancos e instituciones financieras y se diversificaron las ofertas —títulos y valores indexados de todo tipo, emitidos por el Estado, se sumaron a los depósitos a plazo fijo, preferidos por los ahorristas— de modo que, en un clima altamente especulativo, la competencia mantuvo alta las tasas de interés, y con ella la inflación, que el equipo económico prácticamente nunca pudo o quiso reducir. En la nueva operatoria se mantuvo una norma de la vieja concepción: el Estado garantizaba no sólo los títulos que emitía sino los depósitos a plazo fijo, tomados a tasa libre por entidades privadas, de modo que ante una eventual quiebra devolvía el depósito a los ahorristas. Esta combinación de liberalización, eliminación de controles y garantía generó un mecanismo que llevó pronto a todo el sistema a la ruina.

La segunda gran modificación fue la apertura económica y la progresiva eliminación de los mecanismos clásicos de protección a la producción local, vigentes desde

1930. Se disminuyeron los aranceles, aunque en forma despareja y selectiva, y como posteriormente se agregó la sobrevaluación del peso, la industria local debió enfrentar la competencia avasallante de una masa de productos importados de precio ínfimo. La fiebre especulativa ganó a toda la población, que para defender el valor de su salario debía colocarlo a plazo fijo por unos pocos días o ensayar alguna otra martingala más arriesgada; junto con el alud de productos importados de precio mínimo fueron los fenómenos salientes de esta transformación profunda y profundamente destructiva.

La transformación se completó con la llamada "pauta cambiaria", una medida de importancia adoptada en diciembre de 1978, poco después de que el general Videla fuera confirmado por la Junta Militar por tres años en la presidencia, aventando amenazas sobre la estabilidad del ministro. El gobierno fijó una tabla de devaluación mensual del peso, gradualmente decreciente hasta llegar en algún momento a cero. Se adujo que se buscaba reducir la inflación y establecer alguna previsibilidad, pero como la inflación subsistió, el peso se revaluó considerablemente respecto del dólar. La adopción de la pauta cambiaria coincidió con una gran afluencia de dinero del exterior, originado en el reciclamiento que los bancos internacionales debían hacer de los dólares generados por el aumento de los precios del petróleo, que en 1979 volvieron a subir notablemente. El flujo de dólares —origen del fuerte endeudamiento externo— fue común en toda América Latina y en muchos países del Tercer Mundo, pero en la Argentina lo estimuló la posibilidad de tomarlos y colocarlos sin riesgo aprovechando las elevadas tasas de interés internas, pues el Estado aseguraba la estabilidad del valor con que serían recomprados. Pero la "tablita" —tal el nombre popular de la pauta cambiaria— no bastó para reducir ni las tasas de interés ni la inflación, en buena medida por la incertidumbre creciente a medida que la sobrevaluación del peso anticipaba una futura y

necesaria gran devaluación. Mientras se constituía la base de la deuda externa, esta "bicicleta" se agregaba a la "plata dulce" y los "importados coreanos" para configurar la apariencia folclórica de una modificación sustancial de las reglas de juego de la economía.

Su verdadero corazón se hallaba ahora en el sector financiero, donde se concentraron los beneficios. Se trataba de un mercado altamente inestable, pues la masa de dinero se encontraba colocada a corto plazo y los capitales podían salir del país sin trabas, si cambiaba la coyuntura, de modo que, antes que la eficiencia o el riesgo empresario, allí se premiaba la agilidad y la especulación. Muchas empresas compensaron sus fuertes quebrantos operativos con ganancias en la actividad financiera; muchos bancos se convirtieron en el centro de una importante red de empresas, generalmente endeudadas con ellos y compradas a bajo precio. Muchas empresas tomaron créditos en dólares, los emplearon en reequiparse o los colocaron en el circuito financiero, y para devolverlos recurrieron a nuevos créditos, una cadena de la felicidad que, como era previsible, en un momento se cortó.

El momento llegó a principios de 1980. Mientras la economía imaginaria del mercado financiero rodaba hacia la vorágine, la economía real agonizaba. Las altas tasas de interés eran inconciliables con las tasas de beneficio, de modo que ninguna actividad era rentable ni podía competir con la especulación. Todas las empresas tuvieron problemas, aumentaron las quiebras, y los acreedores financieros, que comenzaron a ver acumularse los créditos incobrables, buscaron solucionar sus problemas captando más depósitos, elevando así aún más la tasa de interés, lo que ponía en evidencia las consecuencias de garantizar los depósitos y a la vez eliminar los controles a las instituciones financieras. En marzo de 1980, finalmente, el Banco Central decidió la quiebra del banco privado más grande y de otros tres importantes, que a su vez eran cabezas de sendos grupos empresarios. Hubo una espec-

racular corrida bancaria, que el gobierno logró frenar a costa de asumir todos los pasivos de los bancos quebrados, que en un año llegaron a representar la quinta parte del sistema financiero.

El problema financiero se agravó a lo largo de 1980, y desde entonces hasta el fin del gobierno militar la crisis fue una constante. En marzo de 1981 debía asumir el nuevo presidente, general Roberto Marcelo Viola. Se vislumbraba que Martínez de Hoz dejaría el ministerio, y con él cesaría la vigencia de la "tablita", pronunciada por una masiva emigración de divisas. El gobierno debió endeudarse para cubrir sus obligaciones —la deuda pública empezó a sumarse a la privada— y finalmente tuvo que abandonar la paridad cambiaria sostenida. A lo largo de 1981, y ya con la nueva conducción económica, el peso fue devaluado en un 400%, mientras la inflación recrudescida llegaba al 100% anual. La devaluación fue catastrófica para las empresas endeudadas en dólares y el Estado, que ya había absorbido las pérdidas del sistema bancario, terminó en 1982 nacionalizando la deuda privada de las empresas, muchas de las cuales los propios empresarios ya habían cubierto con salidas de dólares no declaradas.

La era de la "plata dulce" terminaba; probablemente muchos de sus beneficiarios no sufrieron las consecuencias del catastrófico final, pero la sociedad toda debió cargar con las pérdidas. La suba de las tasas de interés en Estados Unidos indicó la aparición de un fuerte competidor en la captación de fondos financieros. En 1982 México anunció que no podía pagar su deuda externa y declaró una moratoria. Fue la señal. Los créditos fáciles para los países latinoamericanos se cortaron, mientras los intereses subían espectacularmente, y con ellos el monto de la deuda. En 1979, ésta era de 8 500 millones de dólares; en 1981 superaba los 25 000 y a principios de 1984 los 45 000. Los acreedores externos comenzaron a imponer condiciones. Deshecho el mecanismo financiero, la deuda externa ocupó su lugar como mecanismo disciplinador.

La economía real: destrucción y concentración

En cuanto a la economía "real", hubo un giro total respecto de las políticas aplicadas en las décadas anteriores. El valor asignado al mercado interno fue cuestionado y se reclamó prioridad para las actividades en las que el país tenía ventajas comparativas y podía competir en el mercado mundial. El criterio de proteger la industria —a la que se achacó su falta de competitividad— fue reemplazado por el del premio a la eficiencia, y fue abandonada la idea de que el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad se asociaban con la industria. Se trataba de un cuestionamiento similar al del resto del mundo capitalista, pero la respuesta local fue mucho más destructiva que constructiva.

La estrategia centrada en el fortalecimiento del sector financiero, la apertura, el endeudamiento y —como se verá— el crecimiento de algunos grupos instalados en distintas actividades, no benefició particularmente a ninguno de los grandes sectores de la economía. Por el contrario, Martínez de Hoz mantuvo conflictos con todos, aunque no encontró ninguna resistencia consistente. El sector agropecuario se encontraba en 1976 en situación óptima: culminaba su formidable expansión productiva en momentos en que se abrían nuevos mercados, particularmente el de la Unión Soviética, afectada por el embargo cerealero norteamericano, al tiempo que el gobierno eliminaba las retenciones a la exportación. Pero la sobrevaluación del peso llevó a los productores a una pérdida de ingresos y a una situación crítica, que culminó en 1980-1981. Los ingresos del sector agropecuario pampeano, que en etapas anteriores subsidiaban a la industria, en la ocasión se trasladaron al sector financiero y a través de él a la compra de dólares o de artículos importados. Luego, cuando la debacle cambiaría los volvió a

colocar en buenas condiciones, la modificación de las condiciones en los mercados internacionales prolongó su crisis.

Por la pérdida de su tradicional protección, la industria sufrió la competencia de los artículos importados, que se sumó al encarecimiento del crédito, la supresión de la mayoría de los mecanismos de promoción y la reducción del poder adquisitivo de la población. El producto industrial cayó en los primeros cinco años alrededor de un 20%, y también la mano de obra ocupada. Muchas plantas fabriles cerraron y en conjunto el sector experimentó una verdadera involución. Lo más grave fue que la reestructuración de la actividad, en lugar de mejorar la eficiencia supuso, como planteó Jorge Katz, una verdadera regresión. Los sectores más antiguos e ineficientes, como el textil y el de confecciones, fueron barridos por la competencia, pero también resultaron muy golpeados aquellos nuevos, como el metalmecánico o el electrónico, que habían progresado notablemente. En momentos en que en esos campos se producía en el mundo un avance tecnológico notable, la brecha que separaba a la Argentina, que se había reducido en los veinte años anteriores, volvió a ensancharse de manera irreversible. Las ramas industriales que crecieron y se beneficiaron con la reestructuración fueron sobre todo las que elaboraban bienes intermedios: celulosa, siderurgia, aluminio, petroquímica, petróleo, cemento, que emplean intensamente recursos naturales —mineral de hierro, carbón, madera— y tienen un efecto dinamizador interno mucho menor que las anteriores. Las escasas empresas dedicadas a estas actividades, sumadas a las automotrices, se beneficiaron de los regímenes de promoción establecidos antes de 1975 y que el nuevo gobierno mantuvo, y también de una protección arancelaria *ad hoc*, en el caso del papel de diario o de los automotores. Proyectadas en un tiempo en que se suponía que el crecimiento industrial se iba a profundizar, estas empresas se encontraron limitadas por la dimensión

del mercado interno, y en muchos casos se convirtieron en exportadoras.

Si bien el sector industrial perdió mucha mano de obra, en el conjunto de la economía la desocupación fue escasa, tal como la conducción militar le había requerido al ministro. Hubo transferencias de trabajadores, en algunos casos de las grandes empresas —con más posibilidades de reducir sus costos laborales— hacia las medianas y pequeñas, y de la industria hacia los servicios: hubo muchos trabajadores que cambiaron su empleo asalariado por la actividad por cuenta propia. La mayor expansión se produjo en la construcción y sobre todo en las obras públicas: el gobierno se embarcó en una serie de grandes proyectos, algunos relacionados con el Campeonato Mundial de Fútbol y otros con el mejoramiento de la infraestructura urbana, como las autopistas de la Capital, aprovechando los créditos externos baratos. En los primeros años el gobierno hizo un esfuerzo sistemático para mantener los salarios bajos, pese a la escasa desocupación: hubo una fuerte caída del salario real y de la participación del ingreso personal en el producto, que pasó del 45% en 1974 al 25% en 1976, para subir al 39% en 1980. Por entonces, el gobierno permitió una mayor libertad a los trabajadores para pactar sus condiciones, pero sin la presencia sindical, lo que estimuló el aumento de las diferencias entre actividades y empresas. A partir de 1981, la crisis, la inflación y la recesión hicieron descender dramáticamente tanto la ocupación como el salario real. En vísperas de dejar el poder, los gobernantes militares no podían exhibir en este campo ningún logro importante.

Cuando la burbuja financiera se derrumbó, quedó en evidencia que la principal consecuencia de la brutal transformación había sido —junto con la deuda externa— una fuerte concentración económica. A diferencia del anterior proceso de concentración, entre 1958 y 1963, el principal papel no correspondió a las empresas extranjeras. No hu-

bo en estos años nuevas instalaciones de importancia, y en cambio algunas grandes empresas se retiraron, y otras vendieron sus activos, aunque se reservaron el papel de proveedoras de partes y de tecnología, como en el caso de algunas de las fábricas de automotores. A diferencia de veinte años atrás, el mercado interno, en franca contracción, resultaba escasamente atractivo; por otra parte, para estas empresas cuya ventaja residía en la posibilidad de planificar su actividad a un plazo mediano o largo no era fácil manejarse en forma eficiente en un medio altamente especulativo, en el que las decisiones diarias significaban grandes ganancias o grandes pérdidas y donde los empresarios locales tenían ventaja. Lo cierto es que, junto con algunas trasnacionales, crecieron de modo espectacular unos cuantos grandes grupos locales, directamente ligados a un empresario o una familia empresarial exitosos, como Macri, Pérez Companc, Bulgheroni, Fortabat, o trasnacionales pero con fuerte base local como Bunge y Born o Techint. Así, el *establishment* económico adquirió una fisonomía original.

En algunos casos esto fue el resultado de la concentración en una rama de actividad, que coincidió con la reestructuración y racionalización de la producción y el cierre de plantas ineficientes. Así ocurrió con el acero, y también con los cigarrillos, una actividad donde tres empresas extranjeras reunieron toda la actividad. Pero los casos más espectaculares fueron los de los conglomerados empresariales, que combinaron actividades industriales, de servicio, comerciales y financieras, tanto por una estrategia de largo plazo de diversificación y reducción del riesgo como —en el contexto fuertemente especulativo— por la búsqueda de distintos negocios de rápido rendimiento. Los grupos que crecieron contaron habitualmente con un banco o una institución financiera que les permitió manejarse en forma rápida e independiente en el sector donde, por unos años, se obtuvieron las mayores ganancias; pero muchos de los grupos que hicieron del banco el centro de

su actividad desaparecieron luego de 1980. Sobrevivieron los que capitalizaron sus beneficios comprando empresas en dificultades, con las que constituyeron los conglomerados. Lo decisivo fue, sin embargo, establecer en torno de alguna de las empresas una relación ventajosa con el Estado.

En los años en que Martínez de Hoz condujo la economía, el Estado realizó importantes obras públicas —desde autopistas a una nueva central eléctrica atómica— para las que contrató a empresas de construcción o de ingeniería. Por otra parte, las empresas del Estado adoptaron como estrategia privatizar parte de sus actividades, contratando con terceros el suministro de equipos —como con los teléfonos— o la realización de tareas, como hizo YPF en las tareas de extracción, y en torno de esas actividades se constituyeron algunas de las más poderosas empresas nuevas. Las empresas contratistas del Estado se beneficiaron primero con las condiciones pactadas y luego con el mecanismo de ajustar los costos al ritmo de la inflación que, dada la magnitud de ésta y las dificultades del gobierno para cumplir puntualmente con sus compromisos, terminaba significando un beneficio mayor aún que el de la obra misma. Otras empresas aprovecharon los regímenes de promoción, que aunque en general se redujeron, continuaron existiendo para proyectos específicos. Esos regímenes posibilitaban importantes reducciones impositivas, avales para créditos baratos, seguros de cambio para los créditos en dólares, monopolización del mercado interno, decisivo en el caso del papel de diario, o suministro de energía a bajo costo, muy importante para las acerías o la fábrica de aluminio. De ese modo muchos grupos empresarios, a menudo sin experiencia importante en el campo, podían constituir su capital con mínimos aportes propios.

Esta política implicaba notables excepciones respecto de las políticas más generales, en beneficio de empresarios específicos, y era el resultado de capacidades también

bo en estos años nuevas instalaciones de importancia, y en cambio algunas grandes empresas se retiraron, y otras vendieron sus activos, aunque se reservaron el papel de proveedoras de partes y de tecnología, como en el caso de algunas de las fábricas de automotores. A diferencia de veinte años atrás, el mercado interno, en franca contracción, resultaba escasamente atractivo; por otra parte, para estas empresas cuya ventaja residía en la posibilidad de planificar su actividad a un plazo mediano o largo no era fácil manejarse en forma eficiente en un medio altamente especulativo, en el que las decisiones diarias significaban grandes ganancias o grandes pérdidas y donde los empresarios locales tenían ventaja. Lo cierto es que, junto con algunas trasnacionales, crecieron de modo espectacular unos cuantos grandes grupos locales, directamente ligados a un empresario o una familia empresarial exitosos, como Macri, Pérez Companc, Bulgheroni, Fortabat, o trasnacionales pero con fuerte base local como Bunge y Born o Techint. Así, el *establishment* económico adquirió una fisonomía original.

En algunos casos esto fue el resultado de la concentración en una rama de actividad, que coincidió con la reestructuración y racionalización de la producción y el cierre de plantas ineficientes. Así ocurrió con el acero, y también con los cigarrillos, una actividad donde tres empresas extranjeras reunieron toda la actividad. Pero los casos más espectaculares fueron los de los conglomerados empresariales, que combinaron actividades industriales, de servicio, comerciales y financieras, tanto por una estrategia de largo plazo de diversificación y reducción del riesgo como —en el contexto fuertemente especulativo— por la búsqueda de distintos negocios de rápido rendimiento. Los grupos que crecieron contaron habitualmente con un banco o una institución financiera que les permitió manejarse en forma rápida e independiente en el sector donde, por unos años, se obtuvieron las mayores ganancias; pero muchos de los grupos que hicieron del banco el centro de

su actividad desaparecieron luego de 1980. Sobrevivieron los que capitalizaron sus beneficios comprando empresas en dificultades, con las que constituyeron los conglomerados. Lo decisivo fue, sin embargo, establecer en torno de alguna de las empresas una relación ventajosa con el Estado.

En los años en que Martínez de Hoz condujo la economía, el Estado realizó importantes obras públicas —desde autopistas a una nueva central eléctrica atómica— para las que contrató a empresas de construcción o de ingeniería. Por otra parte, las empresas del Estado adoptaron como estrategia privatizar parte de sus actividades, contratando con terceros el suministro de equipos —como con los teléfonos— o la realización de tareas, como hizo YPF en las tareas de extracción, y en torno de esas actividades se constituyeron algunas de las más poderosas empresas nuevas. Las empresas contratistas del Estado se beneficiaron primero con las condiciones pactadas y luego con el mecanismo de ajustar los costos al ritmo de la inflación que, dada la magnitud de ésta y las dificultades del gobierno para cumplir puntualmente con sus compromisos, terminaba significando un beneficio mayor aún que el de la obra misma. Otras empresas aprovecharon los regímenes de promoción, que aunque en general se redujeron, continuaron existiendo para proyectos específicos. Esos regímenes posibilitaban importantes reducciones impositivas, avales para créditos baratos, seguros de cambio para los créditos en dólares, monopolización del mercado interno, decisivo en el caso del papel de diario, o suministro de energía a bajo costo, muy importante para las acerías o la fábrica de aluminio. De ese modo muchos grupos empresarios, a menudo sin experiencia importante en el campo, podían constituir su capital con mínimos aportes propios.

Esta política implicaba notables excepciones respecto de las políticas más generales, en beneficio de empresarios específicos, y era el resultado de capacidades también

específicas para negociar con el Estado, obtener ventajas en los contratos, mecanismos adicionales de promoción, concesiones en los acuerdos por "mayores costos", todo lo cual era el resultado de nuevas formas de colusión de intereses. Gracias a ellos, estos grupos pudieron crecer sin riesgos, al amparo del Estado, y en un contexto general de estancamiento. Acumularon una fuerza tal, que en el futuro resultaría muy difícil revertir las condiciones en que actuaban, y junto con los acreedores extranjeros se convirtieron en los nuevos tutores del Estado.

Achicar el Estado y silenciar a la sociedad

La reducción de funciones del Estado, su conversión en "subsidiario", fue uno de los propósitos más firmemente proclamados por el ministro Martínez de Hoz, recogiendo un argumento que circulaba con fuerza creciente en todo el mundo capitalista, donde estaban en plena revisión los principios del Estado dirigista y benefactor, constituido en la Argentina, sucesivamente, en 1930 y en 1945. Tradicionalmente defendido por los sectores rurales, el liberalismo económico nunca había encontrado eco ni entre los empresarios —generalmente beneficiarios del apoyo estatal— ni entre los militares, en quienes pesaba mucho la impronta del estatismo y la autarquía. El ministro obtuvo una importante victoria argumentativa cuando logró ensamblar la prédica de la lucha antisubversiva con el discurso contra el Estado, e incluso contra el industrialismo. Un Estado fuerte y regido democráticamente resultaba un peligroso instrumento si estaba, aunque fuera parcialmente, en manos de los sectores populares, como lo mostraba la experiencia peronista; pero aun sin ser democrático, generaba inevitablemente relaciones espurias entre grupos de empresarios y sindicatos, lo que por otra vía llevaba al mismo resultado. La historia de las últimas cuatro décadas ofrecía abundantes ejemplos para

este argumento, que implícitamente terminaba encontrando la raíz del poder de los trabajadores —el gran obstáculo para lo que se estimaba un funcionamiento normal de la sociedad— en el desarrollo industrial, artificial y subsidiado por la sociedad a través del Estado. La panacea consistía en reemplazar la dirección del Estado por la del mercado —automático, limpio, impersonal—, que mediante la racional asignación de recursos, de acuerdo con la eficiencia de cada uno, destruiría toda posibilidad de colusión entre corporaciones. Paradójicamente, el ministro se propuso utilizar todo el poder del Estado para imponer por la fuerza la receta liberal y redimensionar al Estado mismo.

Así, buena parte de la política de Martínez de Hoz entre 1976 y 1981, cuando el gobierno militar pudo operar con escasas resistencias, tuvo como propósito desmontar los instrumentos de dirección, regulación y control de la economía que se habían construido desde 1930: el control de cambios, la regulación del crédito y la tasa de interés, y la política arancelaria. Cuando la influencia del ministro declinó, y el gobierno todo se vio sumido en una crisis, correspondió a los acreedores externos la vigilancia y presión sobre los gobiernos para que mantuvieran la política de apertura y liberalización. Como buena parte de los militares eran reacios a que el Estado se desprendiera de las empresas de servicios públicos o de aquellas otras ligadas con sus criterios de autarquía, la política fue en ese terreno menos directa, combinando una descalificación genérica —se afirmaba que el Estado las administra ineficientemente— con su deliberada corrupción y destrucción: los mejores cuadros de su administración fueron alejados por los bajos sueldos, se toleró todo tipo de colusiones con los dirigentes sindicales, y las bajas tarifas que se establecieron crearon un desastre financiero, agravado posteriormente por la recurrencia sistemática a créditos externos. La llamada privatización periférica, realizada sin control ni regulación alguna, permitió crecer

a su costa a los competidores privados —con frecuencia sus directivos eran puestos al frente de las empresas públicas—, y capacitarlos en un negocio en el cual la empresa estatal les transfería su larga experiencia. Así las empresas de servicios, hasta entonces relativamente eficientes, se deterioraron, se endeudaron y sirvieron para hacer crecer a las contratistas privadas, mientras que por otra parte el Estado se hacía cargo de infinidad de empresas y bancos quebrados por obra de su política económica.

Se trataba de una manera paradójica de achicar el Estado. El ministro liberalizador ejerció una verdadera dictadura sobre la economía, conducida con una unidad de criterio que contrastaba con la anárquica fragmentación del poder militar. La libertad de mercado se construía por la fuerza, y la violencia era la *ultima ratio*. Pero si ése era el verdadero objetivo, los resultados fueron no sólo magros sino hasta exactamente contrarios. Antes que estimular la eficiencia, el Estado premió a los que sabían obtener de él distintos tipos de prebendas, por mecanismos no demasiado diferentes de los que se había criticado, aunque naturalmente el actor sindical había sido eliminado. Ni siquiera mejoró la eficiencia del Estado en el campo que le era intrínseco e intransferible: la recaudación y asignación de recursos fiscales. Pese a la proclamada aspiración a lograr el equilibrio presupuestario, central desde la perspectiva adoptada para contener la inflación, el gasto público creció en forma sostenida, alimentado primero con la emisión y luego con el endeudamiento externo. Una parte importante tuvo como beneficiario directo a las Fuerzas Armadas, que se reequiparon con vistas al conflicto con Chile primero y con Gran Bretaña por las Malvinas después, y otra también considerable se destinó a programas de obras públicas de dimensión faraónica. Los espacios para las negociaciones espurias se multiplicaron debido a que las tres Fuerzas Armadas se repartieron prolijamente la administración del Estado y la ejecu-

ción de las obras públicas, multiplicando las demandas de recursos. Se gastaba por varias ventanillas a la vez, sin coordinación entre ellas —un aspecto más de la falta de unidad de conducción política—, lo que sumado a la inflación, que tornaba imprevisible lo que efectivamente cada uno recibiría, hizo borrosa la misma existencia de un presupuesto del Estado.

El Estado se vio afectado de forma más profunda aún. El llamado Proceso de Reorganización Nacional supuso la coexistencia de un Estado terrorista clandestino, encargado de la represión, y otro visible, sujeto a normas, establecidas por las propias autoridades revolucionarias pero que sometían sus acciones a una cierta juridicidad. En la práctica, esta distinción no se mantuvo, y el Estado ilegal fue corroyendo y corrompiendo al conjunto de las instituciones del Estado y a su misma organización jurídica.

La primera cuestión oscura era dónde residía realmente el poder, pues pese a que la tradición política del país era fuertemente presidencialista, y a que la unidad de mando fue siempre uno de los principios de las Fuerzas Armadas, la autoridad del presidente —al principio el primero entre sus pares, y luego ni siquiera eso— resultó diluida y sometida a permanente escrutinio y limitación por los jefes de las tres armas. El Estatuto del Proceso y las actas institucionales complementarias —que suprimieron el Congreso, depuraron la Justicia y prohibieron la actividad política— crearon la Junta Militar, con atribuciones para designar al presidente y controlar una parte importante de sus actos, pero las atribuciones respectivas de una y otro no quedaron totalmente deslindadas, y fueron más bien el resultado del cambiante equilibrio de fuerzas. También se creó la Comisión de Asesoramiento Legislativo, para discutir las leyes, integrada por tres representantes de cada arma, que obedecían órdenes de sus mandos, de modo que dicha Comisión se convirtió en una instancia más de los acuerdos y confrontaciones. Cada uno de los cargos ejecutivos, desde gobernadores a in-

tendientes, así como el manejo de las empresas del Estado y demás dependencias, fue objeto del reparto entre las fuerzas, y quienes los ocupaban dependían de una doble cadena de mandos: del Estado y de su Arma, de modo que el conjunto pudo asimilarse a la anarquía feudal antes que a un Estado cohesionado en torno del poder.

La misma anarquía existió respecto de las normas legales que el propio gobierno se daba. Como demostró Enrique Groisman, existió confusión sobre su naturaleza —se mezclaron sin criterio leyes, decretos y reglamentos—, sobre quién las dictaba y sobre su alcance. Hubo una notoria reticencia a explicitar sus fundamentos, y en ocasiones hasta se mantuvo en secreto su misma existencia. Se prefirieron las normas legales omnicomprendivas, y habitualmente se otorgaron facultades amplias a los órganos de aplicación, pero además se toleró su permanente violación o incumplimiento. Contaminado por el Estar terrorista clandestino, todo el edificio jurídico de la República resultó así afectado, al punto que prácticamente no hubo límites normativos para el ejercicio del poder, que funcionó como potestad omnimoda del gobernante. La corrupción se extendió a la administración pública, de la que fueron apartados los mejores elementos: los criterios de arbitrariedad fueron asumidos por los funcionarios inferiores, convertidos en pequeños autócratas sin control, y a la vez sin capacidad para controlar.

En suma, la Reorganización no se limitó a suprimir los mecanismos democráticos constitucionales o a alterar profundamente las instituciones republicanas, como había ocurrido con los regímenes militares anteriores. Desde dentro mismo se realizó una verdadera revolución contra el Estado, afectando la posibilidad de ejercer incluso aquellas funciones de regulación y control que, según las concepciones liberales, le eran propias.

La fragmentación del poder, las tendencias centrífugas y la anarquía derivaban de la escrupulosa división del poder entre las tres fuerzas, al punto de no existir

una instancia superior a ellas que dirimiera los conflictos, pero también de la existencia de definidas facciones en el propio ejército, donde con la represión surgieron verdaderos señores de la guerra, que casi no reconocían autoridad sobre sí. En torno de los generales Videla y Viola —su segundo en el Ejército—, se constituyó la facción más fuerte, pero que distaba de ser dominante. Estos jefes respaldaban a Martínez de Hoz —muy criticado por los militares más nacionalistas, que abundaban entre los cuadros jóvenes— pero reconocían la necesidad de encontrar en el futuro alguna salida política; mantenían comunicación con los dirigentes de los partidos políticos, que se ilusionaban creyendo ver en ellos al sector más civilizado y hasta progresista de los militares, quizá porque reconocían la necesidad de regular de alguna manera la represión.

Otro grupo, cuyas figuras más preeminentes eran los generales Luciano Benjamín Menéndez y Carlos Suárez Mason, comandantes de los cuerpos de Ejército III y I, con sede en Córdoba y Buenos Aires, a los que se asociaba el general Ramón J. Camps, jefe de la policía de la Provincia de Buenos Aires y figura clave en la represión, afirmaban que la dictadura debía continuar *sine die*, y que la represión —que ejecutaban de manera especialmente sanguinaria— debía llevarse hasta sus últimas consecuencias. En conflicto permanente con el comando del arma —con Videla y sobre todo con Viola— Menéndez se insubordinó de hecho varias veces —en ocasión del conflicto con Chile en 1978 estuvo a punto de iniciar la guerra por su cuenta— y en forma explícita una vez, en 1979, que forzó su retiro.

El tercer grupo lo constituyó la Marina de Guerra, firmemente dirigida por su comandante Emilio Massera, quien confiando en sus talentos políticos se propuso encontrar una salida que legitimara popularmente al Proceso y a la vez lo llevara a él mismo al poder. Massera —que desde la Escuela de Mecánica de la Armada ejecutó

una parte importante de la represión y ganó sus méritos en esa tenebrosa competencia— desarrolló siempre un juego propio; jaqueó a Videla, para acotar su poder, y tomó distancia de Martínez de Hoz. Se preocupó por encontrar banderas para lograr alguna adhesión popular al gobierno: el Campeonato Mundial de Fútbol —disputado en el país en 1978, y cuya organización fue presidida por el almirante Lacoste— y luego el conflicto con Chile, que preludió la guerra de Malvinas, también promovida por la Armada. Cuando pasó a retiro, Massera montó una fundación de estudios políticos, un diario propio, un centro de promoción internacional en París, un partido —de la democracia social— y hasta un fantástico *staff* integrado por miembros de las organizaciones armadas secuestrados en la Escuela de Mecánica y que, en lugar de ser ejecutados, accedían a colaborar en los proyectos políticos del almirante.

La puja era sin duda mucho más compleja, pero poco manifiesta. El grupo de Videla y Viola fue avanzando gradualmente en el control del poder, pero en mayo de 1978 Massera se anotó un triunfo cuando logró que se separaran las funciones de presidente de la Nación y de comandante en jefe del Ejército, pese a que Videla fue confirmado como presidente hasta 1981 y Viola lo sucedió como jefe del Ejército. El desplazamiento de Menéndez fue un triunfo importante de Videla, aunque poco después Viola pasó a retiro y lo reemplazó en el mando del Ejército el general Leopoldo Fortunato Galtieri. En septiembre de 1980 Videla pudo imponer en la Junta de Comandantes la designación de Viola como su sucesor, pero a costa de una compleja negociación, que auguró el prolongado jaqueo a que sería sometido el segundo presidente del Proceso.

En suma, podría decirse que la política de orden empezó fracasando con las propias Fuerzas Armadas, pues la corporación militar se comportó de manera indisciplinada y facciosa, y poco hizo para mantener el orden que

ella misma pretendía imponer a la sociedad. A pesar de eso, durante cinco años lograron asegurar una paz relativa, como la de los sepulcros, debido a la escasa capacidad de respuesta del conjunto de la sociedad, en parte golpeada o amenazada por la represión y en parte dispuesta a tolerar mucho de un gobierno que, luego del caos, aseguraba un orden mínimo. Sólo hacia el fin del período de Videla, estimulados por el descontento que generó la crisis económica, así como por las crecientes dificultades que encontraba el gobierno militar y sus fuertes disensiones intestinas, las voces de protesta, todavía tímidas y confusas, comenzaron a elevarse.

Esta transición del silencio a la palabra varió según los casos. Los empresarios apoyaron al Proceso desde el comienzo, pero a la distancia. Pese a las coincidencias generales —sobre todo en lo relativo a la política laboral— había desconfianzas recíprocas: los militares atribuían a los empresarios parte de la responsabilidad del caos social que se habían propuesto modificar, y éstos, por su parte, divididos en sus intereses, no eran capaces de formular orientaciones o reclamos claros y homogéneos. Aquellos empresarios específicamente beneficiados todavía no constituían un grupo orgánico, institucionalizado y con voz propia. Las voces corporativas —la Sociedad Rural, la Unión Industrial— criticaban aspectos específicos de las políticas económicas que los afectaban, y algunos generales como la elevada inflación, pero más allá de eso carecían de unidad y fuerza para presionar corporativamente, y sólo empezaron a hacerlo cuando el régimen militar dio, a la vez, signos de debilidad y de disposición a la apertura. El general Viola, buscando tomar distancia de la política de Martínez de Hoz, convocó específicamente a los voceros de los grandes sectores empresarios y los integró en su gabinete, pero la participación concluyó con su caída, y desde entonces los empresarios, muy golpeados por la crisis, fueron integrando con creciente entusiasmo el frente opositor.

El movimiento sindical recibió duros golpes. La represión afectó a los activistas de base y a muchos dirigentes de primer nivel, que fueron encarcelados. Las principales fábricas fueron ocupadas militarmente, hubo "listas negras", para mantener alejados a los activistas, y control ideológico para los aspirantes a empleo. La CGT y la mayoría de los grandes sindicatos fueron intervenidos, se suprimieron el derecho de huelga y las negociaciones colectivas y los sindicatos fueron separados del manejo de las obras sociales. Privados casi de funciones, reducidos como consecuencia de los cambios en el empleo, que afectó sobre todo a los industriales, los sindicatos hicieron oír poco su voz.

El gobierno mantuvo una mínima comunicación con los sindicalistas, casi limitada a la conformación de la delegación que anualmente debía concurrir a la asamblea de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. Esto les permitió una cierta actividad y algún espacio para denunciar en el exterior las duras condiciones de los trabajadores y, por esa vía, para plantear al gobierno cuestiones acerca de salarios, convenios y huelgas. Los sindicalistas se agruparon, de manera cambiante, en dos tendencias: los dialoguistas y los combativos. En abril de 1979, cuando la represión había menguado algo, los combativos realizaron un paro general de protesta, que los dialoguistas no acataron, y que concluyó con una fuerte represión y prisión para la mayoría de los dirigentes que lo encabezaron. A fines de 1980, los dirigentes más combativos reconstituyeron la CGT y eligieron como secretario general a un miembro poco conocido de un pequeño sindicato: Saúl Ubaldini. En 1981, aprovechando la mayor tolerancia del gobierno, la CGT realizó una nueva huelga general, con consecuencias similares a la de 1979, y en el mes de noviembre una marcha obrera hacia la Iglesia de San Cayetano —patrono de los desocupados—, reclamando "pan, paz y trabajo". Por entonces, sus quejas se unían a las de otros sec-

tores, como los estudiantes o algunos grupos de empresarios regionales. Las huelgas parciales se hicieron más frecuentes e intensas; el 30 de marzo de 1982 la CGT convocó, por primera vez desde 1975, a una movilización en la Plaza de Mayo, que el gobierno reprimió con violencia: hubo 2 000 detenidos en Buenos Aires y un muerto en Mendoza.

También la Iglesia modificó su comportamiento a medida que el régimen militar empezaba a dar muestras de debilidad. Inicialmente tuvo una actitud complaciente, y a la vez el gobierno estableció una asociación muy estrecha con los obispos, asegurándoles importantes ventajas personales. La jerarquía eclesiástica —con algunas conspicuas excepciones, como el obispo de La Rioja, Angelelli, probablemente asesinado— aprobó la asociación que en sus expresiones públicas los militares hacían entre terrorismo de Estado y virtudes cristianas, calló cualquier crítica, justificó de manera poco velada la llamada erradicación de la subversión atea, y hasta toleró que algunos de sus miembros participaran directamente en ella, según denunció y probó la CONADEP. Pero progresivamente esta respuesta inicial, que revelaba el triunfo del sector local más tradicional, fue dejando paso a otra más elaborada, influida por la orientación conservadora impuesta a la Iglesia romana por el nuevo papa Juan Pablo II. Revisando sus anteriores posiciones, que habían alentado el desarrollo de los sectores progresistas y particularmente de los tercermundistas, la Iglesia se propuso renunciar a la injerencia directa en las cuestiones sociales o políticas y consagrarse a evangelizar y volver a sacralizar una sociedad que se había tornado excesivamente laica. En 1979 el Arzobispado constituyó el equipo de pastoral social, para reconstruir el vínculo entre Iglesia y trabajadores, siguiendo el ejemplo del sindicato polaco Solidaridad, y estrechó relaciones con sindicalistas como Ubaldini. También se ocupó de los jóvenes, para captar y organizar los brotes de nueva religiosidad, manifiestos

en las concurrencias peregrinaciones a pie a Luján, y llenar el lugar vacante por la desaparición de los activistas que tan intensamente lo habían ocupado en los años anteriores. Las preocupaciones por las cuestiones morales o por la familia se extendían hacia los derechos de las personas, desde la vida hasta el trabajo, y también por las políticas: el documento "Iglesia y comunidad nacional", de 1981, afirmó los principios republicanos, indicó la opción de la Iglesia por la democracia, su apartamiento del régimen militar y su vinculación con los crecientes reclamos de la sociedad.

El más notable de ellos fue el de los derechos humanos. En medio de lo más terrible de la represión, un grupo de madres de desaparecidos —forma con la que comenzó a denominarse a las víctimas del terrorismo de Estado— empezó a reunirse todas las semanas en la Plaza de Mayo, marchando con la cabeza cubierta por un pañuelo blanco, reclamando por la aparición de sus hijos. Al pedir cuentas, combinando lo dolorosamente testimonial con lo ético, en nombre de principios como la maternidad, que los militares no podían cuestionar ni englobar en la "subversión", atacaron el centro mismo del discurso represivo y empezaron a conmover la indiferencia de la sociedad. Pronto, las Madres de Plaza de Mayo —víctimas ellas mismas de la represión— se convirtieron en la referencia de un movimiento cada vez más amplio y fueron instalando una discusión pública, fortalecida desde el exterior por la prensa, los gobiernos y las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Desde fines de 1981 los militares se vieron obligados a dar alguna respuesta a un tema que pretendían archivar sin discusión, y aunque en general coincidieron en que la cuestión debía darse por concluida, mostraron diferencias y contradicciones que agudizaron sus anteriores dimensiones y ampliaron un poco más la brecha por la que la opinión pública, largamente acallada, comenzaba a reaparecer.

Este clima empezó a insuflar algo de vida a los partidos políticos, a los que el régimen militar había prohibido el funcionamiento público. La veda política, impuesta en 1976, congeló la actividad partidaria y a la vez prorrogó las dirigencias que, carentes de impulsos vitales, tuvieron una actitud escasamente crítica. La prohibición política terminó de hecho en 1981. Los dispersos grupos de derecha fueron convocados para constituir una fuerza política oficialista por el propio gobierno, que ensayó su apertura política, mientras peronistas y radicales entablaban conversaciones con otros partidos menores que culminaron, a mediados de 1981, con la constitución de la Multipartidaria, integrada por el radicalismo, el peronismo, y otros partidos: el desarrollismo, la democracia cristiana y los intransigentes. Esta organización no tenía mayor vitalidad que la escasa de los partidos que la integraban. Se trataba de organizaciones anquilosadas y escasamente representativas, cuyos dirigentes eran los mismos de 1975. Ricardo Balbín, el veterano político radical que animó este intento, murió en 1981 —su entierro convocó la primera gran manifestación callejera de esos años—, poniendo más en evidencia la vacancia de dirección del incipiente movimiento. Los partidos se comprometían a no colaborar con el gobierno en una salida electoral condicionada ni a aceptar una democracia sometida a la tutela militar. Se trataba de un acuerdo mínimo, revelador de las dificultades para plantear alternativas políticas que movilizaran la opinión. Pero también ellos, progresivamente, fueron elevando su tono, se reclamaron los únicos depositarios de la legitimidad política, e incorporaron las protestas de empresarios y sindicalistas o las vinculadas con los derechos humanos, aunque cuidando de dejar abierta la puerta para una salida concertada. Junto con las otras voces —sindicalistas, empresarios, estudiantes, religiosos, intelectuales, y sobre todo defensores de derechos humanos— fueron formando un coro que a principios de 1982 era difícil de ignorar.

*La guerra de Malvinas y la crisis
del régimen militar*

Desde 1980 los dirigentes del Proceso discutían la cuestión de la salida política. Les preocupaba la crisis económica, el aislamiento, la adversa opinión internacional —en la que pesaban cada vez más los reclamos por los derechos humanos, que el gobierno intentaba minimizar tachándolos de “campana antiargentina”—, y sobre todo los enfrentamientos intestinos, que a la vez dificultaban los acuerdos necesarios para la salida buscada. Las disidencias se habían manifestado públicamente con la designación de Viola —a la que se opuso la Marina—, se agudizaron en el largo período que medió hasta su asunción, en marzo de 1981, y maduraron cuando fue evidente la decisión del nuevo presidente de modificar el rumbo de la política económica.

Viola procuró aliviar la situación de los empresarios locales, golpeados por la crisis financiera y la violenta devaluación de la moneda —el Estado se hizo cargo de parte de sus deudas— y a la vez trató de concertar la política económica, incorporándolos al gabinete. Tomó contacto con distintos políticos —los “amigos” del Proceso— y discutió con ellos las alternativas para una eventual y lejana transición, pero no logró organizar ningún apoyo consistente, ni tampoco atenuar la crisis económica desencadenada por la violenta devaluación del peso y la acelerada inflación. Lo hostigaban los sectores que habían rodeado a Martínez de Hoz, y distintos grupos militares lo acusaban de falta de firmeza en la conducción. A fines de 1981, una enfermedad de Viola dio la ocasión para su derrocamiento y reemplazo por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, que retuvo su cargo de comandante en jefe del Ejército, modificando así la precaria institucionalidad que los mismos jefes militares habían establecido.

Galtieri, un general que a diferencia de Viola era poco ducho en política, se presentó como el salvador del Proceso, el dirigente vigoroso capaz de conducirlo a una victoria que por entonces parecía remota. En la formación de esa imagen había sido decisiva su reciente estancia en Estados Unidos, donde fue asiduamente cultivado por miembros de la administración de Reagan —que en 1981 había sucedido a Carter—, preocupados por encontrar aliados para su compleja política exterior. Galtieri se manifestó dispuesto a alinear categóricamente al país con Estados Unidos, y a apoyarlo en la guerra encubierta que libraba en América Central. El país contribuyó por entonces con asesores y armamentos y obtuvo de Estados Unidos, junto con una cálida adhesión personal, el levantamiento de las sanciones que la administración anterior había impuesto al país por las violaciones a los derechos humanos. Probablemente fue allí cuando Galtieri concibió su destino de conductor de la Argentina hacia el mundo de las grandes potencias, el Primer Mundo, donde el país —protegido por su poderoso aliado— podría jugar el juego de los grandes.

Designado presidente, Galtieri se lanzó a la política activa e intentó, en forma más enérgica y personal que Viola, armar un movimiento en el que los “amigos políticos” sustentaran su propio liderazgo, mientras anunciaba vagamente, sin fechas ni plazos precisos, la futura institucionalización. Encargó la conducción de la economía a Roberto Alemann, destacado economista del *establishment*, quien rodeado de buena parte del equipo de Martínez de Hoz retornó a la senda inicial, y de acuerdo con las nuevas circunstancias creadas por la crisis y la deuda, definió sus prioridades en torno de “la desinflación [sic], la desregulación y la desestatización”. En lo inmediato, la recesión se agudizó, y con ella las protestas de sindicatos y empresarios; para el largo plazo, anunció un plan de privatizaciones, particularmente del subsuelo, que suscitó resistencias incluso en sectores del gobierno. Así, el impe-

tu de Galtieri chocó pronto con resistencias cada vez más enconadas, con voces cada vez más altisonantes, y hasta con movilizaciones callejeras, como la lanzada por la CGT el 30 de marzo de 1982.

Fue en ese contexto cuando se concibió y lanzó el plan de ocupar las islas Malvinas, que aparecía como la solución para los muchos problemas del gobierno. La Argentina reclamaba infructuosamente a Inglaterra esas islas desde 1833, cuando fueron ocupadas por los británicos. En 1965 las Naciones Unidas habían dispuesto que ambos países debían negociar sus diferencias, pero los británicos poco habían hecho para avanzar en el sentido de los reclamos argentinos, coincidentes con las tendencias generales del mundo hacia la descolonización. Existía, pues, un reclamo nacional unánime en su fondo, aunque no en las formas y medios para lograrlo. Desde la perspectiva de los militares, una acción militar que condujera a la recuperación de las islas permitiría unificar a las Fuerzas Armadas tras un objetivo común y ganar, de un golpe, la cuestionada legitimidad ante una sociedad visiblemente disconforme.

Una acción militar tendría una segunda ventaja: posibilitaría encontrar una salida al atolladero que había creado la cuestión con Chile por el canal del Beagle. En 1971, los presidentes Lanusse y Allende habían acordado someter a arbitraje la cuestión de la posesión de tres islotes que dominan el paso por aquel canal, que une los océanos Atlántico y Pacífico. En 1977, el laudo arbitral los otorgó a Chile, y el gobierno argentino lo rechazó. En 1978, ambos países parecían dispuestos a dirimir la cuestión por las armas cuando, casi en el último minuto, decidieron aceptar la mediación del Papa, por intermedio del cardenal Samoré. A fines de 1980, el Vaticano comunicó reservadamente su propuesta, que en lo sustantivo mantenía lo establecido en el laudo, y el gobierno argentino —imposibilitado tanto de rechazarla como de aceptarla— optó por dilatar la respuesta y retomar la situación de activa hostilidad con Chile.

Por entonces había cobrado forma definida entre los militares y sus amigos una corriente de opinión belicista, que arraigaba en una veta del nacionalismo argentino y se alimentaba con vigorosos sentimientos chauvinistas. Diversas fantasías largamente acuñadas en el imaginario histórico de la sociedad —la "patria grande", los "desposos" de los que el país había sido víctima— se sumaban a la nueva fantasía de "entrar en el Primer Mundo" mediante una política exterior "fuerte". Todo ello se sumaba al ya tradicional mesianismo militar y a la ingenuidad de sus estrategas, ignorantes de los datos más elementales de la política internacional. La agresión a Chile, bloqueada por la mediación papal, fue desplazada hacia Gran Bretaña, el tradicional imperio, que se suponía viejo y achacoso. Ya en 1977, la Marina había planteado la propuesta de ocupar las islas, vetada por Videla y Viola, que retomó apenas Galtieri asumió la presidencia. La idea era sencilla y atractiva. Luego del golpe de mano, que presentaba pocas dificultades, se contaba con el apoyo norteamericano y la reluctante reacción de Gran Bretaña, que finalmente admitiría la ocupación, a cambio de todas las concesiones y compensaciones necesarias. En ninguna de las hipótesis entraba la posibilidad de una guerra.

El 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas desembarcaron y ocuparon las Malvinas, luego de vencer la débil resistencia de las escasas tropas británicas. El hecho, sorprendente para casi todos, suscitó un amplio apoyo: la gente se reunió espontáneamente en la Plaza de Mayo, y volvió a hacerlo, en forma multitudinaria, allí y en las capitales provinciales, cuando fue convocada, una semana después, en ocasión de la visita del secretario de Estado norteamericano Alexander Haigh. Ese día el presidente Galtieri tuvo la satisfacción de arengar a la multitud desde el histórico balcón. Todas las instituciones de la sociedad —colectividades extranjeras, clubes deportivos, asociaciones culturales, sindicatos, partidos políticos— manifestaron su adhesión sin reserva. Los dirigentes polí-

ticos viajaron, junto con los jefes militares, para asistir a la asunción del nuevo gobernador militar de las islas, general Mario Benjamín Menéndez, y a la imposición de su nuevo nombre a su capital, Puerto Stanley, rebautizada como Puerto Argentino. Los dirigentes de la CGT, que habían sido fuertemente reprimidos apenas tres días atrás, trataron de diferenciar su adhesión a la acción de un eventual apoyo al gobierno, pero esta distinción no era fácil de explicar. El gobierno militar había obtenido una cabal victoria política al identificarse con una reivindicación de la sociedad que arraigaba en un profundo sentimiento, alimentado por una tradicional cultura política nacionalista y antiimperialista, que ya parecía archivada pero resurgió vigorosamente. También había captado las formas pueriles y superficiales en que esos sentimientos se manifestaban, el torpe chauvinismo con que se mezclaba, así como el fácil triunfalismo y el belicismo acrítico —fue sorprendente que prácticamente nadie discutiera la licitud de los medios—, revelador de una desintegración de convicciones políticas que otrora habían sido más sólidas y profundas. La sociedad que había festejado el triunfo argentino en el Campeonato Mundial de Fútbol ahora se alegraba de haber ganado una batalla, y con la misma inconciencia se disponía a avanzar, si era necesario, hacia una guerra. Si triunfaban, los militares habrían saldado sus deudas con la sociedad, al solo precio de conceder una mayor libertad para que se expresaran voces no regimentadas, que sin embargo, cuando se apartaban del libreto oficial —por ejemplo reclamando el abandono de la política económica liberal y la adopción de una “economía de guerra”— eran fácilmente descartadas.

La reacción fue sorprendentemente dura en Gran Bretaña, donde los pacifistas perdieron la discusión y triunfaron los sectores más conservadores, encabezados por la primera ministra Margaret Thatcher, que al igual que los militares aspiraba a utilizar una victoria militar para consolidarse internamente. De inmediato se alistó una fuerza

naval de importancia, que incluía dos portaaviones y contingentes para el desembarco; el 17 de abril la Fuerza de Tareas se había reunido en la isla Ascensión, en el Atlántico, e iniciaba su marcha hacia las Malvinas; en torno de las islas se declaró una zona de exclusión, dentro de la cual se atacaría a cualquier fuerza enemiga.

Gran Bretaña obtuvo rápidamente la solidaridad de la Comunidad Europea, que se sumó a las sanciones económicas dispuestas por el Commonwealth, y el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que votó una resolución declarando a la Argentina nación agresora y obligando al cese de las hostilidades y al retiro de las tropas. El poderoso bloque que apoyaba a los británicos apenas era contrapesado por el latinoamericano, ampliamente solidario en lo declarativo pero de poco peso militar, por una distante simpatía de la Unión Soviética y por la actitud relativamente equidistante del gobierno norteamericano, que intentaba mediar entre sus dos aliados.

Sin respaldos consistentes, y aun ignorando sus reglas, el gobierno militar se lanzó al juego grande del Primer Mundo, suponiendo que, luego del hecho consumado, la cuestión se resolvería por medio de una negociación, de modo que la reacción inglesa no sólo resultó inesperada sino improcedente. Estados Unidos, por medio del general Haigh, secretario de Estado, trató de encontrar una salida negociada y una fórmula transaccional. Propuso una retirada militar argentina y una administración tripartita conjunta con Estados Unidos, que permitiera restablecer las negociaciones. Ambas condiciones eran aceptables para el gobierno argentino si se le agregaba el compromiso a plazo fijo de reconocimiento británico de la soberanía sobre las islas —cosa inaceptable para los británicos—, pues el gobierno militar, dispuesto a transar en cualquier otro tema, no podía aparecer resignando aquello que había proclamado como su objetivo fundamental. Sólo así la operación podía ser presentada como una victoria ante la sociedad y ante la multitud que se reuniría

en la plaza, cuya magia ya habían experimentado los militares. En los términos en que ellos mismos habían planeado la operación, cualquier otro resultado equivalía a una derrota. Así, los gobernantes argentinos quedaron apresados por la movilización patriótica que ellos mismos habían lanzado, y los más prudentes debieron ceder ante las voces de los más exaltados.

Persiguiendo un objetivo imposible, el gobierno argentino fue víctima de un aislamiento diplomático creciente, que resultaba agravado por sus antiguos pecados, pues quienes le habían reprochado las violaciones a los derechos humanos consideraron, con razón, que esta aventura bélica, si resultaba triunfante, significaría convalidar todo su desempeño anterior. El envío de empresarios, sindicalistas y políticos al exterior para explicar la posición argentina no sirvió para modificar esto, y en muchos casos le dio a sus opositores una tribuna donde, defendiendo los intereses nacionales, hacían conocer sus críticas al gobierno.

El gobierno militar había intentado presionar a Estados Unidos utilizando los mecanismos de la Organización de Estados Americanos, y sobre todo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que anteriormente Estados Unidos había empleado para alinear tras de sí a sus vecinos en sus conflictos contra el Eje o contra Cuba. Los países latinoamericanos mantuvieron su respaldo a la Argentina, pero la resolución que votaron a fines de abril fue lo suficientemente amplia y general como para no implicar un compromiso militar. Luego de un mes de intentar infructuosamente convencer a la Junta Militar, y en momentos en que empezaba el ataque británico a las islas, Estados Unidos abandonó su mediación; el Senado votó sanciones económicas a la Argentina y ofreció a Gran Bretaña apoyo logístico. Cada vez más solo, el gobierno argentino buscó aliados imposibles —los países del Tercer Mundo, la Unión Soviética y hasta Cuba— que lo alejaban definitivamente de la ilusión de entrar al

Primer Mundo. Mientras tanto, la batalla militar se acercaba inexorablemente.

En los últimos días de abril la Fuerza de Tareas británica, que había llegado a la zona de Malvinas, recuperó las islas Georgias. El 1° de mayo comenzaron los ataques aéreos a las Malvinas, y al día siguiente un submarino británico hundió al crucero argentino General Belgrano, ubicado lejos de la línea de batalla, con lo que la flota argentina optó por alejarse definitivamente del frente de combate. Siguió luego un largo combate aeronaval: la aviación argentina bombardeó la flota británica y le causó importantes daños, incluyendo un blanco perfecto de un misil teledirigido sobre el crucero Sheffield, que de alguna manera compensó el hundimiento del Belgrano, pero no la detuvo ni logró impedir que las islas quedaran aisladas del territorio continental. En ellas, los jefes militares habían ubicado cerca de 10 000 soldados, en su mayoría bisoños —por algún motivo, se prefirió destinar la tropa más entrenada a la frontera con Chile—, escasos de abastecimientos, sin equipos ni medios de movilidad, y sobre todo sin planes, salvo resistir. En Buenos Aires, la figura del Alcázar de Toledo, su heroica resistencia y la posibilidad de que se produjera algún cambio en el equilibrio de fuerzas en el mundo, ocupó el imaginario de los militares. En las islas, en cambio, sometidas a un demoleedor ataque de artillería y aviones, las dudas fueron trocándose en desmoralización.

Un cambio similar se dio en la opinión pública, demorado en parte por la total manipulación de las informaciones, que además llegaban a un público dispuesto a creer que la Argentina estaba ganando la guerra. En medio del clima triunfalista empezaron a aparecer voces críticas: algunos hablaban en nombre de Estados Unidos y reclamaban contra una guerra y un alineamiento imposibles; otros, desde la izquierda, exigían profundizar los aspectos antiimperialistas del conflicto y atacar a los representantes locales de los agresores. En los actos de la CGT

por el 1° de Mayo volvieron a alzarse las voces agrías, mientras que dentro del radicalismo, cuya conducción oficial había aceptado mansamente los términos de la cuestión puestos por el gobierno, Raúl Alfonsín, que dirigía el sector opositor, propuso la constitución de un gobierno civil de transición, que encabezaría el ex presidente Illia. Así, entre protestas crecientes por la falta de información, el tema del país luego de la guerra se instaló en la opinión pública, y refirmó a los militares en su convicción inicial: no había otra salida que la victoria.

El 24 de mayo los ingleses desembarcaron y establecieron una cabecera de puente en San Carlos. El 29 se libró un combate importante en el Prado del Ganso, donde varios cientos de argentinos se rindieron. El 10 de junio Galtieri pudo dirigirse por última vez a la gente reunida en la Plaza de Mayo, y dos días después llegó el Papa Juan Pablo II, en parte para compensar su anterior visita a Inglaterra, en parte, quizá, para preparar los ánimos ante la inminente derrota. Antes de que finalizara su breve estadía, comenzó el ataque final a Puerto Argentino, donde se había atrincherado la masa de las tropas. La desbandada fue rápida y la rendición, prácticamente incondicional, se produjo el 14 de junio, 74 días después de iniciado el conflicto, que dejó más de 700 muertos o desaparecidos y casi 1 300 heridos. Los gobernantes convocaron al día siguiente al pueblo a la Plaza de Mayo, sólo para reprimir en forma extremadamente violenta a aquellos que, convencidos por los medios de difusión de que la victoria estaba cercana, no podían ni entender ni admitir la rendición. Por entonces, los generales exigían a Galtieri su renuncia.

La vuelta de la democracia

La derrota agudizó la crisis del régimen militar, planteada desde el descalabro financiero de 1981, e hizo públicos

322

los conflictos hasta entonces disimulados. La cuestión de la responsabilidad de la derrota —que unos a otros se atribuían— se resolvió provisionalmente achacándola a los jefes operativos, aunque luego salieron a la luz fallas más sustanciales, que involucraban a los altos mandos; finalmente, el informe de una comisión investigadora, presidida por un general muy prestigioso, responsabilizó a la propia Junta Militar y la llevó a un juicio que, posteriormente, concluyó en la condena a los comandantes. En lo inmediato, las tres fuerzas no se pusieron de acuerdo sobre el sucesor de Galtieri, y aunque el Ejército pudo imponer a su candidato, el general Reynaldo Bignone, la Marina y la Aeronáutica se retiraron de la Junta Militar, creando una situación institucional insólita: un presidente designado por el comandante en jefe del Ejército. Quizá hubiera sido el momento para que un vigoroso movimiento civil desplazara a las Fuerzas Armadas, pero tal movimiento estaba lejos de existir, y el designado presidente logró afirmarse gracias a un consenso mínimo de las fuerzas políticas para un programa de reinstitucionalización sin plazos definidos. Pasado el momento más agudo de la crisis, se produjo una recomposición interna, se renovaron los comandos de la Armada y la Aeronáutica y se reconstituyó la Junta.

La salida electoral propuesta sirvió para calmar los reclamos de las fuerzas políticas. Pero el gobierno se proponía negociarla y asegurar que su retirada no sería un desbande. Se intentó lograr el acuerdo de los partidos para una serie de cuestiones, futuras y pasadas: la política económica, la presencia institucional de las Fuerzas Armadas en el nuevo gobierno, y sobre todo una garantía de que no se investigarían ni actos de corrupción o enriquecimientos ilícitos ni responsabilidades en lo que los militares empezaban a llamar la "guerra sucia", con un eufemismo comparable al de "desaparecidos". Por entonces, todo ello empezaba a ser hecho público de manera casi sensacionalista por una prensa que había decidido olvidar

323

la censura. Las aspiraciones militares se incluyeron en una propuesta, presentada en noviembre de 1982 y rechazada por la opinión pública en general y por los partidos, que convocaron poco después a una marcha civil en defensa de la democracia. La asistencia fue masiva, y casi de inmediato, el gobierno fijó la fecha de elecciones, para fines de 1983, aunque siguió buscando lo que constituía su objetivo fundamental: clausurar cualquier cuestionamiento futuro al desempeño pasado de los militares. Un documento final debía clausurar el debate sobre los desaparecidos, con la afirmación de que no había sobrevivientes y de que todos los muertos habían caído combatiendo; una ley estableció una autoamnistía, eximiendo a los responsables de cualquier eventual acusación.

Quizá la dirigencia política se hubiera avenido a un acuerdo que implicara correr un telón sobre el pasado y asegurar una transformación no traumática del régimen militar en otro civil, pero lo impidió tanto la movilización cada vez más intensa de la sociedad como la propia debilidad de las Fuerzas Armadas, corroídas por la creciente conciencia de su ilegitimidad y por sus propios conflictos internos. Quienes estaban al frente del gobierno y negociaban la reinstitucionalización eran incapaces de controlar el aparato represivo que habían montado —el que cobró algunas nuevas víctimas, que la sociedad, sensibilizada, registró con horror— y aun de asegurar que no serían derrocados por algún grupo de oficiales, porque de hecho las Fuerzas Armadas habían entrado en estado deliberativo, tanto acerca del pasado como del futuro. Los militares debían enfrentarse con la evidencia de su fracaso como administradores de un país desquiciado y como conductores de una guerra absurda, que los había llevado a luchar contra los que querían sus aliados y a unirse con un Tercer Mundo del que siempre habían desconfiado. Debían contemplar cómo sus antiguos aliados —los grandes empresarios, la Iglesia, Estados Unidos—, ganados por una nueva fe de-

mocrática, renegaban de los antiguos acuerdos, o cómo los otrora disciplinados jueces llevaban a los tribunales a oficiales acusados de distintos actos de corrupción. Sobre todo, debían enfrentarse con una sociedad que, después de años de ceguera, se enteraba de la existencia de vastos enterramientos de personas desconocidas, con seguridad víctimas de la represión, de centros clandestinos de detención, de denuncias realizadas por ex agentes, todo lo cual revelaba una historia siniestra, de la que hasta entonces pocos habían querido enterarse. En esas condiciones, el intento de recomponer las antiguas alianzas, que había guiado al último gobierno de las Fuerzas Armadas, difícilmente hubiera podido fructificar.

Después de un largo letargo, la sociedad despertaba, y encontraban nueva resonancia voces que nunca se habían acallado, como la de los militantes de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y muy especialmente las Madres de Plaza de Mayo. Su incontrastable manera de desafiar el poder militar se combinaba con una forma original de activismo, más laxa y menos facciosa que las tradicionales, que no inhibía otras pertenencias. Las marchas de los jueves, con escasa concurrencia en los años duros de la represión, se convirtieron luego de la guerra de Malvinas en nutridas "marchas por la vida", que identificaban con eficacia al enemigo con la muerte. Las organizaciones de derechos humanos no sólo colocaron la cuestión de los desaparecidos en el centro mismo del debate, poniendo a los militares a la defensiva, sino que impusieron a toda la práctica política una dimensión ética, un sentido del compromiso y una valoración de los acuerdos básicos de la sociedad por encima de las afiliaciones partidarias que, en el contexto de las experiencias anteriores, era verdaderamente original.

A medida que la represión retrocedía y perdía legitimidad el discurso represivo —tan eficaz para la autocensura—, empezaron a constituirse protagonistas sociales de distinto tipo, algunos nuevos y otros que habían podido

sobrevivir ocultándose. La crisis económica generó motivos legítimos y movilizadores: los impuestos elevados, los efectos de la indexación, la elevación de los alquileres, o las deudas impagas dejadas por una quiebra bancaria; y al reclamar y movilizarse cuestionaban tanto la política económica como la clausura de lo público. En otros casos era todo un pequeño fragmento de sociedad —un barrio, un pueblo— el que se organizaba sobre la base de solidaridades amplias tanto para reclamar —quizá con violencia, como en los "vecinazos" del Gran Buenos Aires a fines de 1982— como para buscar una solución a sus problemas al margen de las autoridades. Bajo la forma de cooperativas, asociaciones de fomento o ligas de amas de casa. La nueva actividad de la sociedad se manifestaba también en los campos más diversos: los grupos culturales, como los que en Teatro Abierto organizaron desde 1980 la demostración de una vital cultura no oficial, convertida en verdadero acto político. los jóvenes que animaban grupos de trabajo en las parroquias, los que nutrían las multitudinarias peregrinaciones a Luján o los gigantes recitales de rock nacional, que a su manera también resultaban actos políticos. El activismo renació en las universidades, al calor de los reclamos contra los cupos de ingreso o el arancelamiento, y en las fábricas y lugares de trabajo, donde empezaron a reconstituirse las comisiones internas y a reaparecer la práctica de la participación sindical.

De alguna manera, la sociedad experimentaba una nueva primavera: el enemigo común, algo menos peligroso pero aún temible, estimulaba la solidaridad y alentaba una organización y una acción de la que se esperaban resultados concretos. Nuevamente, los conflictos de la realidad aparecían transparentes, y posible la solución de los problemas. si los hombres y mujeres de buena voluntad se organizaban en una fuerza consistente. Pero a diferencia de la anterior primavera, no sólo había un repudio total de la violencia o de cualquier forma velada de

guerra, sino también menos confianza en la posibilidad de encontrar una gran solución, única, radical y definitiva, y menos seguridad de que el amplio conjunto de demandas planteadas definieran un gran protagonista, un actor único de la gesta, como lo había sido, por mucho tiempo, el "pueblo peronista". Precisamente los límites de este despertar de la sociedad se encontraron en la dificultad para agregar las demandas, integrarlas, darles continuidad y traducirlas en términos específicamente políticos.

En alguna medida, su integración debía darse también en la movilización sindical, que fue intensa: los sindicalistas sacaron la gente a la calle para reclamar contra la crisis económica y en favor de la democracia. A lo largo de 1982 y 1983 hubo una serie de paros generales y abundantes huelgas parciales, en las que se destacaron, por su nueva y aguerida militancia, los gremios estatales. Pero en verdad, los sindicalistas pusieron sus esfuerzos en la recuperación del control de los sindicatos intervenidos, la "normalización", que negociaron con el gobierno combinando la presión y el acuerdo. En esa estrategia concurren los dos grandes nucleamientos en que se encontraban divididos, más bien por razones tácticas, la combativa CGT de la calle Brasil, que encabezaba Saúl Ubaldini, y la negociadora CGT Azopardo. Su acción movilizadora fue perdiendo especificidad y confluyó en la lucha más general por aquello que concentraba las mayores ilusiones: la recuperación de la democracia.

La democracia fue en primer lugar una ilusión: la tierra prometida, alcanzada sin esfuerzo por una sociedad que, muy poco antes, adhería a los términos y opciones planteados por los militares. Luego del doble sacudón de la crisis económica y la derrota militar, la democracia aparecía como la llave para superar desencuentros y frustraciones, no sólo creando una fórmula de convivencia política sino también solucionando cada uno de los problemas concretos. Varias décadas sin una práctica real hacían necesario un nuevo aprendizaje de las reglas

del juego, y también de sus valores y principios más generales, incluyendo los que tenían que ver, más allá de la democracia, con la misma república. Fue precisamente ese conocimiento vago y aproximativo el que permitió que se encabalaran en la nueva ilusión quienes nunca habían creído en ella, sobre todo los que estaban abandonando rápidamente el barco del Proceso. Pero se la aprendió con intensidad, y se la puso en práctica pronto. La afiliación a los partidos políticos —luego de que el gobierno levantó definitivamente la veda— fue tan masiva que uno de cada tres electores pertenecía a un partido. Las movilizaciones en defensa de la democracia recordaron por su número a las de diez años atrás, pero a diferencia de aquéllas no eran ni fiestas ni ejercicios para la toma del poder sino la expresión de una voluntad colectiva, el mostrarse y el reconocerse como integrantes de la civilidad. Esa diferencia se expresó también en los lugares de concentración elegidos: junto con la tradicional Plaza de Mayo, la de la República, el Cabildo o los Tribunales, indicador éste del papel central que, según se esperaba, debía cumplir la justicia.

La afiliación masiva transformó a los partidos políticos. Hubo un amplio deseo de participación y se animaron los comités o unidades básicas, donde empezaron a volcarse las demandas de la sociedad. También se renovaron los cuadros dirigentes, y se incorporaron los que en los últimos años habían militado en organizaciones juveniles o estudiantiles, como en el caso de la Coordinadora radical, así como muchos intelectuales, que trajeron a la política nuevos temas —muchos surgidos de las inquietudes que estaba planteando la sociedad, y otros de la experiencia de las sociedades democráticas más avanzadas— y también formas más modernas de plantearlos. Los viejos cuadros dirigentes se vieron desafiados por otros que desde los márgenes habían planteado posiciones discrepantes, de modo que la renovación fue amplia e integral.

Las transformaciones del peronismo fueron notables, pues el viejo movimiento, siempre en tensión con la democracia, se convirtió en un aceptable partido. La cuestión del verticalismo, que había signado su existencia, quedó superada por la notoria falencia del vértice —Isabel Perón sólo ocupó simbólicamente la presidencia—, y la estructura partidaria pudo también absorber a los sectores con fuerte organización corporativa, como los sindicalistas. Las formas participativas fueron adoptadas para regular la competencia interna, y los modernos temas y preocupaciones democráticas, que nunca habían sido el fuerte del movimiento, aparecieron en forma razonable. La renovación, sin embargo, no fue completa: los viejos caudillos provincianos siguieron manteniendo un lugar importante, al igual que los dirigentes sindicales. El metalúrgico Lorenzo Miguel —el sucesor de Vandor, a quien los militares rehabilitaron a principios de 1983— volvió a conducir las 62 Organizaciones, rama gremial del peronismo, y gracias a su control de las afiliaciones llegó a ocupar la presidencia real del partido. Detrás de él ganaron espacios importantes caudillos sindicales de trayectoria poco clara, como Herminio Iglesias, que alcanzó la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. La candidatura a presidente recayó en Ítalo Luder, un jurista de prestigio pero con escaso poder real en el partido, que debía expresar el equilibrio entre las nuevas y viejas tendencias internas, pero que no pudo disipar la desconfianza que el peronismo despertaba en sectores importantes de la sociedad.

El radicalismo se renovó por impulso de Raúl Alfonsín, que en 1972 había creado el Movimiento de Renovación y Cambio para disputar el liderazgo a Ricardo Balbín. Durante el Proceso se distinguió del resto de los políticos, pues criticó a los militares con mucha energía, asumió la defensa de detenidos políticos y el reclamo por los desaparecidos y evitó envolverse en la euforia de la guerra de Malvinas. Desde el fin de la guerra su ascenso fue vertiginoso, derrotando en la puja interna a los here-

deros de Balbín. Hizo de la democracia su bandera, y la combinó con un conjunto de propuestas de modernización de la sociedad y el Estado, una reivindicación de los aspectos éticos de la política y un discurso ganador, muy distinto del tradicional radical, que atrajeron al partido una masa de afiliados y simpatizantes.

Radicales y peronistas cosecharon amplios apoyos y dejaron poco espacio para otros partidos. A la derecha, siguió siendo difícil unificar fuerzas diversas, muchas de las cuales se habían comprometido demasiado con el Proceso como para resultar atractivas. El ingeniero Alsogaray constituyó un nuevo partido, la Unión del Centro Democrático, que empezó a beneficiarse con el impulso mundial hacia las concepciones ortodoxamente liberales, pero su cosecha mayor la haría años después. La izquierda padeció tanto por la dura represión de los años del Proceso como por la desactualización de sus propuestas, muchas de las cuales fueron tomadas por el radicalismo alfonsinista, aunque el Partido Intransigente logró reunir un amplio espectro de simpatizantes, en buena medida nostálgicos de la política de 1973.

Alimentados por la movilización de la sociedad y por esta segunda y apacible primavera de los pueblos, sin embargo los partidos tuvieron dificultades para dar plena cabida a las múltiples demandas y al deseo de participación, que fue diluyéndose lentamente o se mantuvo al margen de ellos, como en las organizaciones de derechos humanos, cada vez más intransigentes en una demanda que los partidos intentaban traducir en términos aceptables para el juego político. La misma dificultad se manifestó respecto de los intereses sociales más estructurados, como los sindicales o los empresarios, cuyas demandas discurrieron por los cauces corporativos y prescindieron de los partidos para su expresión o negociación. De ese modo, el crecimiento de los partidos no supuso una eficaz intermediación y negociación de las demandas de la sociedad.

Tal situación, sin embargo, no preocupaba demasiado, pues la sociedad estaba adhiriendo con entusiasmo a una democracia que entendía como la primacía de la civilidad. Las formas de hacer política del pasado reciente —la intransigencia de las facciones, la subordinación de los medios a los fines, la exclusión del adversario, el conflicto entendido como guerra— dejaban paso a otras en las que se afirmaba el pluralismo, los acuerdos sobre formas y una subordinación de la práctica política a la ética. Celebrando la novedad —en rigor, hacía seis décadas que se había dejado de lado este juego democrático— se valoró y hasta sobrevaloró la eficacia de este instrumento. Para cuidarlo, nutrirlo y fortalecerlo, se puso sobre todo el acento en el consenso alrededor de las reglas y en la acción conjunta para la defensa del sistema. Quizá por eso se postergó una dimensión esencial de la práctica política: la discusión —civilizada y plural— de programas y opciones, que necesariamente implican conflictos, ganadores y perdedores, y se confió en el poder y la capacidad de la civilidad unida para solucionar cualquier problema. Esta combinación de la valoración de la civilidad con un fuerte voluntarismo derivó en un cierto facilismo, en una especie de “democracia boba”, aséptica y conformista.

Los problemas derivados de esto se verían más adelante. De momento, la civilidad vivió plenamente su ilusión, y acompañó al candidato que mejor captó ese estado de ánimo colectivo. El peronismo encaró su campaña con mucho del viejo estilo, convocando a la liberación contra la dependencia —con tan poca convicción que uno de sus candidatos, en un revelador lapsus, equivocó en un discurso público la opción positiva— y apeló a lo peor del folclore del movimiento para denostar a su adversario. Raúl Alfonsín, en cambio, ganó su candidatura en la UCR primero, y las elecciones presidenciales luego, apelando en primer lugar a la Constitución, cuyo Preámbulo —seguramente escuchado por primera vez por muchos de sus jóvenes adherentes— era un “rezo laico”. Agregó una

apelación a la transformación de la sociedad, que definía como moderna, laica, justa y colaborativa. Estigmatizó al régimen, aseguró que se haría justicia con los responsables y denunció en sus adversarios sus posibles continuadores, por obra del pacto entre militares y sindicalistas. Sobre todo aseguró que la democracia podía resolver no sólo los problemas de largo plazo —los cincuenta años de decadencia— sino satisfacer la enorme masa de demandas acumuladas y prestas a plantearse. La sociedad le creyó y el radicalismo, con más de la mitad de los votos, superó holgadamente al peronismo, que por primera vez en su historia perdía una elección nacional. Una alegría profunda y sustantiva, aunque un poco inconsciente, envolvió a sus seguidores y en alguna medida a toda la civilidad, que por un momento olvidó cuántos problemas quedaban pendientes y qué poco margen de maniobra tenía el nuevo gobierno.

El
ci
pl
tu
tón
bil
ca
Pr
ter
ta
qu
ba
im
—
tor
pr
au
Me
co
ca
co
de
cla
sal
lin
de
po
ca